

CAUSA ROL Nº : C-695-2018
MATERIA : INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.
CÓDIGO : I03A
DEMANDANTE : GONGORA GONZÁLEZ, EDUARDO CESAR Y OTRA
DEMANDADO : COLEGIO SAN JORGE S.A.
FECHA INICIO : 05 / 04 / 2018

Arica, doce de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 05 de abril de 2018 en folio 1, don Mauricio Alejandro Ortiz Meier, abogado, en representación de don Eduardo Cesar Gongora González, chileno, casado, ingeniero industrial y doña Carla Andrea Veliz Allende, chilena, ingeniero industrial, quienes accionan por ellos y en representación de sus hijos menores de edad, Amalia Trinidad Gongora Veliz, Maximiliano Andrés Gongora Veliz y Sebastián Vicente Gongora Veliz, todos domiciliados para estos efectos en calle Manuel Baquedano N°796-A, oficina 11, interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra de Nelly Ximena Roxana Soto Espinoza S.A. (Colegio San Jorge), representado legalmente por doña Nelly Maria Soto Espinoza, ignora profesión u oficio, con domicilio en camino Azapa KM 2.5, Arica.

indica el abogado que su representada, con fecha 19 de diciembre del 2016, se acercó al Colegio San Jorge para matricular a sus 3 hijos para el año 2017, indicándole el director don Omar Sagredo Núñez que debía esperar hasta el 26 de diciembre del 2016 para recibir una respuesta, ya que el consejo estaba decidiendo si sería posible realizar la matrícula, agregando que posteriormente el día 27 de diciembre del año 2016, al buscar la respuesta, se les indicó por parte del director, que sus 3 hijos no tendrían matrícula en ese colegio para el año 2017, y que su matrícula terminaba el 31 de diciembre del 2016.

Agrega que al solicitar al director el motivo de la medida le señaló que ellos estimaban que “el colegio San Jorge no cumplía con sus expectativas como familia”, respuesta que indica rechazó, señalándole al director era imposible que ellos supieran cuales eran sus expectativas como apoderados y familia, pues en 6 años jamás se acercaron al colegio a solicitar, exigir o reclamar ningún hecho o situación específica o general.

Refiere a la fecha de la demanda, que Sebastián Góngora Véliz (9 años) es alumno de 2do básico, con promedio 6,8, con buena evaluación personal y



constantemente felicitado por profesora o inspectores. Por su parte Amalia Góngora Véliz (5 años), es alumna de medio menor (educación pre-escolar), con excelente comportamiento y ningún reclamo de parte de educadoras o apoderadas. Finalmente Maximiliano Góngora Véliz (7 años) es alumno de kínder y que ese año fue promovido a 1ero básico, alumno destacado entre todos sus compañeros en todas las áreas de su educación, por su personalidad y sobresaliente inteligencia.

Precisa el demandante que en el mes de octubre del año 2016, el colegio citó a sus representados para que firmaran una carta de compromiso por el comportamiento de su hijo Maximiliano, por tratarse –según le explicaron- de un niño inquieto en el salón, conversador, travieso y ansioso, situación que les extrañó, pues solo a ellos como apoderados se les hizo esta solicitud y porque el colegio siempre ha solicitado firmar este compromiso en diciembre al momento de la matrícula, pero nunca en octubre, agregando que la referida citación coincidió de manera sospechosa, con una situación que habría ocurrido el día 18 de agosto del 2017, en donde la educadora de su hijo Maximiliano la Sra. Ángela Ramírez, en medio de la clase, les exhibió un video del portal YouTube denominado “Tres Pequeños Gatitos Cortometraje Animado 3D”, el que el demandante califica como muy fuerte para niños de 5 años, en donde en una familia de 4 integrantes mueren, 3 por una grave enfermedad, sobreviviendo solamente el menor de ellos, un pequeño de unos 5 años aproximadamente”, refiriendo que en ese momento su hijo solicitó a la educadora que sacara el video porque a él le estaba dando miedo, lo cual le fue negado, reiterando su solicitud sollozando y asustado y pidiendo que lo deje salir al patio para no seguir viendo ese video, a lo cual la educadora nuevamente se negó, terminando su hijo de ver el video, llorando y tapándose a ratos sus ojos, todo lo cual habría sido confirmado por la asistente que acompañaba a la educadora en el salón en ese momento.

Continúa su relato señalando que producto de la exposición al video mencionado, su hijo de 6 años lloraba todas las tardes desde que llegaba del colegio y en la noche presentaba violentas y constantes pesadillas, situación que se mantuvo por un período de un mes y medio, y de la cual asegura, tanto la educadora y la coordinadora del jardín fueron puestas en antecedentes, pues se acercaron angustiados y preocupados a pedir explicaciones y ayuda, indicando el colegio, que se trató de un lamentable error de la educadora, agregando que para ayudar al niño a superar estas crisis, lo llevaron a una terapeuta floral que lo asistió con terapias físicas y con gotas florales de urgencia.



Vuelve en su relato el demandante señalando que sus representados se negaron a firmar la referida carta de compromiso, por estimar que comportamiento señalado en la carta, era común en muchos niños del curso, pero sólo a ellos les estaban haciendo firmar dicho compromiso por que la fecha en que les solicitaron firmar el compromiso y finalmente porque estimaron que antes de citarlos a firmar, debieron llamarlos para comunicarles que su hijo presentaba un mal comportamiento, lo afirma nunca hicieron, encontrándose edemas pendiente una respuesta formal del colegio en relación al video que se exhibió a su hijo.

Comenta que ellos como apoderados jamás incumplieron el reglamento del colegio, nunca hicieron reclamos, ni escándalos en el mismo, y tampoco faltaron el respeto de manera física, verbal o por redes sociales a ninguna educadora, funcionario, apoderado o alumno del establecimiento, por lo que sus representados sospechan que la decisión del colegio, se tomó por el incidente del video, estimando que de esa manera, el colegio, se sacaba de encima un problema a futuro pues hasta el año 2017 su hijo aún seguía presentado pesadillas y problemas en su día a día.

Relata que se sintieron humillados y discriminados por la manera en que las cosas se dieron en la cancelación de la matrícula de sus 3 hijos, pues insiste en que no se cumplen las condiciones que indica el reglamento del colegio para tomar tan grave y decisión, añadiendo que sus representados recurrieron de la decisión del colegio mediante una solicitud de reconsideración presentada al colegio de fecha 28 de diciembre de 2016, y a su vez por un reclamo a la superintendencia de educación de fecha 19 de diciembre de 2016 y la interposición de un recurso de protección de fecha 29 de diciembre de 2016, precisando que e la solicitud de reconsideración nunca fue respondida, que la superintendencia habría aplicado una amonestación por escrito al establecimiento y que el recurso de protección, que fue acogido, ordenando al demandado a dejar sin efecto su decisión de poner término al contrato de prestación de servicios educacionales respecto de los alumnos recién individualizados, quienes deberán ser restituidos a clases con todos sus derechos y obligaciones para el año lectivo 2017, previo cumplimiento del proceso de matrícula.”

Continúa señalando que su hijo Maximiliano, en su nuevo colegio, ha dejado de manifiesto a través de su comportamiento, que todo lo mencionado en el colegio anterior, carece de veracidad y que el episodio del video lo mantuvo con crisis de pánico hasta aproximadamente octubre del año 2017 -incluso mientras estaba en su nuevo colegio-, debiendo ser llevado a una psicóloga infantil, quien luego de 5 sesiones de análisis entregó un informe confirmando que el video en



cuestión, gatillo en él, un estado de pánico y psicosis que como niño no era capaz de sobrellevar por sí solo, siendo puesto en tratamiento para ayudarlo a superar sus crisis señalando además que la separación de sus compañeros le habría afectado su autoestima, al sentirse desechado de su grupo sin entender las razones reales del alejamiento repentino de su curso. A su vez, al hijo mayor de sus representado Sebastián, que en ese momento tenía 8 años, el cambio de colegio también lo habría afectado pues el llevaba 6 años en un ambiente escolar que para él ya era familiar y querido, por lo que no lograba entender lo ocurrido, del porqué no podía continuar en su colegio con sus compañeros y profesora, con la cual llevaba 2 años y era muy apegado a ella, agregando que la inserción en su nuevo colegio le costó mucho más que a sus hermanos, logrando integrarse y a formar nuevos vínculos, tanto con sus profesores, inspectores y nuevos compañeros, recién en octubre del año 2017, pues durante el primer semestre fue rechazado por ser nuevo, llegando a sufrir incluso bullying de parte de algunos compañeros del curso, lo que lo llevó a él en un par de ocasiones a reaccionar de manera ofuscada y brusca, por lo que el colegio, resolvió mantener su situación escolar en observación para el año 2018.

En el caso de Amalia, la menor de los 3 hermanos, indica que el periodo de adaptación duró todo el primer semestre del 2017, en donde todos los días lloraba por no querer estar en su nuevo colegio, y solo pedía volver a su anterior colegio con sus tías y compañeros, con los cuales había compartido 2 años.

En cuanto al derecho, indica que el daño debe ser indemnizado y que en el caso de marras existe una responsabilidad civil derivada de un contrato de servicios educacionales al que se puso término de forma unilateral por parte de la demandada, el cual afirma, al no ser renovado para el periodo 2017, se cometió un acto arbitrario que ha conculcado el derecho constitucional de igualdad ante la ley, vulnerando los derechos de sus representados y cita en relación a ello, lo dispuesto en los artículos 2.465 y 2.329 del Código Civil.

En relación al daño señala que doña Carla Veliz, ha realizado gastos por tramites en una cifra de aproximadamente \$1.000.000 (un millón de pesos) y en cuanto al lucro cesante, indica que no ha podido trabajar normalmente pues se dedica a atender a sus hijos debido a las consecuencias psicológicas por el cambio de colegio, lo que avalúa en \$5.000.000 (cinco millones de pesos). Por ultimo en cuanto al daño moral, indica que doña Carla, se siente absolutamente vulnerada en su salud, pues los miembros de la familia, no duermen bien, pensando en la situación vivida, y la humillación que significa que los desarraiguen de su grupo humano de compañeros y amigos de infancia, junto con la visión



crítica de los demás padres y apoderados, pues para la comunidad escolar, sus representados fueron expulsados, pasando a llevar sus derechos e incluso lo dictaminado por la Corte de Apelaciones, por todo lo cual, avalúa el daño moral de doña Carla en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos)

En relación a don Eduardo Cesar Gongora González, indica que el experimentó daño moral, por el sufrimiento y aflicción provocada por el actuar del Colegio, en contra de sus hijos, y por los problemas de salud que significó esta situación (presión nerviosa, insomnio, etc.), todo lo cual avalúa en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Finalmente afirma que los menores Amalia Gongora Véliz, Maximiliano Gongora Véliz y Sebastián Gongora Véliz, experimentaron daño moral, por el actuar contrario a derecho de la demandada, el cual avalúa para cada uno, en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), es decir, un total de \$120.000.000 (Ciento veinte millones de pesos).

Conforme a lo anterior e invocando lo dispuesto en el artículo 1.545 y siguientes; artículo 2.314 y siguientes del Código Civil, pide, tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra en contra del Colegio San Jorge de esta ciudad, ya individualizado, y en definitiva, ordene se indemnice por el valor total de los daños sufridos por sus representados, considerando el daño emergente, lucro cesante y el daño moral, por la suma total de \$206.000.000 (doscientos seis millones de pesos), o la suma que el tribunal determine en derecho, para cada uno de ellos, todo con expresa condena en costas.

Con fecha 13 de septiembre de 2018 en el folio 6, se notificó personalmente de la demanda a doña Nelly Maria Soto Espinoza en su calidad de representante de Nelly Ximena Roxana Soto Espinoza S.A. (Colegio San Jorge).

Con fecha 05 de noviembre de 2018, en folio 11, la abogada Coralí Aravena León, en representación de la parte demandada Colegio San Jorge S.A., contesta la demanda solicitando su total rechazo con costas.

Tras revisar los hechos de la demanda, indica que estos no son efectivos ni se ajustan a la realidad, no obstante reconoce que se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales entre su representada y doña Carla Andrea Véliz Allende para que sus hijos pudieran recibir la educación en el establecimiento educacional Colegio San Jorge.

Precisa en cuanto a los hechos, que debido a reportes e informes educacionales del menor Maximiliano Góngora Véliz, alumno del Kinder "A", por resolución de la dirección del Colegio San Jorge, el 12 de octubre de 2016 se



solicitó por documento escrito a su apoderado titular mantener el compromiso de corregir conductas del pupilo y que consistían en:

- 1.- Actitud disruptiva en clases.
- 2.- Agresividad con sus compañeros de clases.
- 3.- Dificultad para reconocer normas y límites.

Indica que el aludido documento que no quiso firmar la apoderada titular, consigna en su parte final que “Si el alumno no cumple el compromiso incurriendo nuevamente en faltas, se evaluara su continuidad en el colegio para el año escolar 2017”, siendo este documento suscrito por la educadora Sra. Ángela Ramírez Castro, por la orientadora Rosario Flores Contreras, por la Directora del jardín Infantil María Jesús Iraguen y por el Director del establecimiento educacional Omar Sagredo Núñez.

Señala tras lo anterior, que atendidos los problemas conductuales del menor, su constante y agresivo relacionamiento con sus pares y educandos, los reclamos de padres de compañeros de curso y la falta de involucramiento y disposición negativa de sus padres frente a las propuestas para superar los problemas conductuales de Maximiliano, es que el establecimiento educacional no renovó la matrícula del menor Maximiliano Góngora Véliz para el año lectivo 2017, por lo que reitera que los hechos y aseveraciones de los demandantes no son efectivos y no se ajustan a la realidad, por cuanto afirma que el Colegio San Jorge jamás se negó a renovar la matrícula del menor Maximiliano Góngora Véliz por meras conjeturas de los demandantes o por alguna sensación de que se habría tomado la decisión sólo por un incidente relacionado con un video reproducido en clases por la profesora del menor o “...sacándose así un problema a futuro de encima...”, menos aún discriminando o estigmatizando al menor y asimismo refiere que tampoco es efectivo como se ha sostenido que la demandada no hubiere renovado la matrícula a sus otros dos hijos.

Indica también en cuanto a los hechos de la demanda, que la demandante Carla Andrea Véliz Allende dedujo recurso de protección ante la I. Corte de Apelaciones de Arica rolado bajo en rol N° 797-2016, acogándose dicho recurso y ordenando la Corte a la dirección de la demandada dejar sin efecto la decisión de poner término al contrato de prestación de servicios educacionales respecto de los hijos de la actora, y ser restituidos a clases con todos sus derechos y obligaciones para el año lectivo 2017, previo cumplimiento del proceso de matrícula, no obstante, precisa que el establecimiento educacional, a través de su director Omar Sagredo Núñez, al evacuar el informe de rigor, manifestó su completa disposición de reconsiderar la medida respecto del menor Maximiliano, previa aceptación



formal y comprometida de las orientaciones y reglamentaciones del colegio, perdiendo oportunidad la acción cautelar, sin que el apoderado del menor referido cumpliera con el proceso de matrícula, tampoco con el compromiso de tomar las orientaciones y reglamentaciones del colegio, pues afirma que no matriculó para el año lectivo 2017 a ninguno de sus hijos como lo ordenó la I. Corte.

Indica que con las aludidas precisiones en relación a los hechos, puede advertirse que la demanda resulta improcedente, pues a su juicio, los actores efectúan una narración incompleta, sesgada y con hechos que no se ajustan a la realidad.

Por otra parte y ya en cuanto a sus excepciones y defensas, opone en primer término, la excepción de falta de personería del que comparece a nombre de los demandantes, indicando que consta de la redacción del libelo de demanda, que acciona de indemnización de perjuicios el letrado Mauricio Alejandro Ortiz Meier por don Eduardo César Góngora González y por doña Carla Andrea Véliz Allende y refiere que éstos lo hacen por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Amalia Trinidad, de 5 años de edad, de Maximiliano Andrés, de 7 años de edad y de Sebastián Vicente, de 9 años de edad; todos Góngora Véliz.

No obstante, al indica que al leer la escritura pública de Mandato Judicial otorgada ante Notario Público don Armando Sánchez Risi, con fecha 20 de enero de 2016, cuya vigencia no aparece acreditada en autos, consta que el mandato judicial ha sido otorgado sólo por Eduardo César Góngora González y Carla Andrea Véliz Allende por sí al letrado que dedujo la demanda, sin que éstos hubieren otorgado el referido mandato al mismo letrado por sus hijos menores de edad y para para actuar por ellos, por lo que afirma deberá rechazarse la demanda intentada respecto de los menores de edad, toda vez que el letrado carece de personería para comparecer y deducir la demanda a nombre de los menores Amalia Trinidad, Maximiliano Andrés y Sebastián Vicente, todos Góngora Véliz.

Asimismo, opone la excepción de falta de representación legal del que comparece a nombre de los demandantes menores de edad, Amalia Trinidad Góngora Véliz, de 5 años de edad, de Maximiliano Andrés Góngora Véliz, de 7 años de edad y de Sebastián Vicente Góngora Véliz, de 9 años de edad, indicando que en estos autos, han accionado don Eduardo Góngora González y doña Carla Andrea Véliz Allende refiriendo que lo “hacen por sí y en representación de sus hijos menores de edad...”, sin haber acreditado que efectivamente detentan la representación legal de sus hijos.



Indica en relación a lo anterior, que la circunstancia de ser Eduardo Góngora González y Carla Véliz Allende padres de los menores demandantes no necesariamente importa que sean sus representantes legales y que detentan su cuidado personal uno de ellos o ambos de manera conjunta, como lo prescribe el artículo 264 del Código Civil y dado que estas circunstancias no fueron acreditadas en autos, no pueden interponer demanda en sus nombres y representación y la demanda de autos por los menores deberá ser en definitiva rechazada.

Además de las excepciones indicadas, alega la inadmisibilidad en la forma, en cuanto al régimen de responsabilidad por los cuales se demanda, indicando que es evidente que la demandante ha incurrido en graves errores al no precisar concretamente el ámbito de responsabilidad que le atañe a la demandada en el libelo pretensor, mezclando la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual.

Indica que atendido lo anterior, la facultad jurisdiccional del tribunal queda determinada y delimitada única y exclusivamente a todo aquello que se somete a su conocimiento y decisión, y a la aplicación del derecho que lo regula, debiendo por tanto rechazarse la demanda, por dos razones:

I.- La carencia de facultad jurisdiccional, indicando en este respecto que atendido que la parte demandante ha confundido dos regímenes de responsabilidad distintos, el tribunal no podrá pronunciarse en base a alguno de estos estatutos pues no fue determinado por la actora, y de hacerlo, se vulneraría la garantía constitucional del debido proceso establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política del Estado al dictar una sentencia con infracción a las leyes de procedimiento que constituyen la garantía de seguridad e igualdad en la Litis, indicando grosso modo, que de resolverse el asunto controvertido por aplicación de la responsabilidad contractual, se incurriría de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 170 N°6 del Código de Procedimiento Civil, en un vicio de ultra petita, pues con el pronunciamiento se excedería lo pedido.

II.- La inadmisibilidad del cúmulo de responsabilidades, señalando al respecto que el tribunal tampoco puede por virtud y en el afán de justicia para resolver la demanda principal, hacer aplicable un régimen subsidiario de responsabilidad, ajeno al vínculo regulado expresamente por las partes en forma previa, como es el Régimen de Responsabilidad Extracontractual o Contractual, pues reitera que la demanda de autos debió estar sujeta a uno u otro régimen de la responsabilidad civil, no en ambos.



También relacionado con lo anterior, alega también la inadmisibilidad de la demandada, por existir en confusión en esta en lo relativo al derecho invocado, por las razones ya revisadas.

En subsidio de las anteriores alegaciones, indica que para el caso de que el tribunal estimare que puede conocer de los hechos del fondo de la Litis, y aún cuando la sentencia fuese anulable por vicio de ultra petita, se debe proceder igualmente al rechazo de la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas; por carecer de fundamentos la demanda, en tanto no existiría la responsabilidad indemnizatoria por la cual se demanda al Colegio San Jorge S.A, por ausencia de los requisitos necesarios para establecerla.

Refiere en relación a los requisitos de la acción de perjuicios, que en el caso de marras, hay ausencia de culpa de su representada, estimando que no es posible emitir juicio alguno de reproche o disvalor respecto de su obrar.

Asimismo, agrega que hay ausencia de lesión o daño, indicando a este respecto que amen de no existir los referidos daños, estos no resultan atribuibles al actuar de su representada.

Indica en este contexto que a pesar de lo ordenado por la ltima Corte de Apelaciones de Arica, en su sentencia del ya referido recurso de protección, los actores no cumplieron con el proceso de matrícula previo, lo que afirma da cuenta de la pertinaz y resistente conducta de los actores padres del menor para involucrase en el proceso de mejorar la conducta de su hijo y que los actores concurrieron con su propia conducta a la producción del daños a sus hijos menores de edad, por lo que estima que cualquier perjuicio que pudiera alegarse, sólo proviene de la referida conducta de los padres del menor, quienes han alegado su propio dolo en autos, a lo que agrega que no consta que el menor Maximiliano Andrés Góngora hubiere desarrollado patologías a consecuencia del video que vio junto al resto de sus compañeros de curso y que su conducta en el actual establecimiento educacional al que asiste no esté exento de los mismos reparos.

Por último, alega también la ausencia de nexo causal, refiriendo que los supuestos daños sufridos por los actores, están muy lejanos a la esfera del obrar de la demandada, teniendo estos su origen en la conducta de los padres actores, y no de la demandada.

En cuanto a los daños cuya indemnización se reclama, reitera que respecto de su representada no procede la condena al pago de indemnización pecuniaria alguna, no obstante alega que además existe un exceso de avalúo de los daños demandados, los que afirma no se encuentran justificados y acreditados, y no se condicen



con la relación de los hechos de la demanda, por cuanto estima que los padecimientos que se alegan son inexistentes o producto patologías propias previas.

Por otra parte, refiere que tampoco corresponde la indemnización pretendida por encontrarse fundada en meras alegaciones o conjeturas de los actores.

En cuanto al Daño Patrimonial alegado, indica que la actora Carla Véliz Allende reclama daño emergente por la suma de \$1.000.000.- por gastos y trámites, etc., que habría realizado, sin que efectúe un detalle pormenorizado de éstos y a qué corresponden o cuál es el origen de éstos, realizando una referencia básica y genérica, por lo que debe ser rechazado, además exige pago de lucro cesante por la suma de \$5.000.000.-, aduciendo que no ha podido trabajar normalmente ya que se dedica en mayor medida a atender a los hijos menores debido a las consecuencias psicológicas por el cambio de colegio, sin indicar cuál es su trabajo, los ingresos que percibía y que ha dejado de percibir, lo que deberá acreditar, y finalmente reclama daño moral por la suma de \$40.000.000.- porque dice sentirse vulnerada en su salud y tranquilidad mental ya que sus hijos no duermen bien, han sido desarraigados de su grupo humano de compañeros y amigos de la infancia, etc., describiendo así supuestos daños que no son propios sino de sus hijos, por lo que estima que este daño también deberá ser rechazado.

Por otra parte, el actor Eduardo Góngora González reclama daño moral por la suma de \$40.000.000.- por las mismas razones que doña Carla Veliz, y finalmente, en cuanto al daño actual y futuro de sus hijos, indica que deberá tenerse presente que estos además de ser acreditados, solo podrán ser indemnizados los daños presentes más no los futuros inciertos.

Indica que no obstante la alegación relativa a la incertidumbre del régimen de responsabilidad demandado, y para el evento de dar lugar a la pretensión intentada por este concepto, es necesario precisar que atendida la naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes –esto es, contractual-, el daño moral pretendido fuera en sede contractual, es improcedente, toda vez que conforme se preceptúa en el artículo 1.558 del Código Civil la indemnización se limita sólo a los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al momento de contratar. Y en este caso, el daño moral estaba fuera de toda perspectiva de análisis al regular la relación jurídica entre las partes, ya que, su consideración es absolutamente ajena al objeto de la obligación pactada.

Por ultimo alega que de acogerse la tesis de que el daño moral en una relación contractual puede ser indemnizado, indica que el daño deberá ponderarse



en forma justa y prudente de manera tal que tampoco pueda importar el enriquecimiento injustificado de la demandante.

Con fecha 21 de marzo de 2019 en folio 23, tuvo lugar la audiencia de conciliación decretada en autos, con la asistencia del apoderado de la parte demandante y en rebeldía de la parte demandada.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

Con fecha 25 de marzo de 2019 en el folio 24, se recibió la causa a prueba, fijándose hechos substanciales, pertinentes y controvertidos.

Con fecha 04 de octubre de 2019 en el folio 24, se acogió reposición del auto de prueba, y se agregaron puntos de prueba..

Con fecha 02 de marzo de 2020 en el folio 63, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I - EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS

PRIMERO: Que, con fecha 08 de noviembre de 2019 en el folio 51, la parte demandada, objetó por falta de autenticidad o falsedad y falta de integridad, los documentos acompañados por la parte demandante en los folios 46 y 47 consistentes en los informes psicológicos de Carla Andrea Véliz Allende y del menor Maximiliano Andrés Góngora Véliz emitidos por doña Katherine Nova Leila,, el certificado de atención psicológica del grupo familiar de doña Carla Andrea Véliz Allende emitido por doña Katherine Nova Leila e Informe académico y social emitido por Graciela Salazar Martínez Profesora de Jefatura Colegio Junior College, señalando que se tratan de instrumentos que no emanan de su parte, sino de terceros ajenos al juicio

SEGUNDO: Que, con fecha 27 de febrero de 2020 en folio 61, la parte demandante, evacuó traslado solicitando el rechazo de las objeciones deducidas.

TERCERO: Que, tratándose la objeción deducida por la demandada, de una apreciación subjetiva respecto de forma de los documentos objetados, y atendido a que el examen y calificación del valor probatorio de los instrumentos aportados corresponde a una prerrogativa del tribunal, la objeción deducida será rechazada.

II - EN CUANTO A LA DISCUSIÓN Y LAS PRUEBAS

CUARTO: Que el abogado Mauricio Alejandro Ortiz Meier, en representación de don Eduardo Cesar Gongora González y doña Carla Andrea



Veliz Allende, quienes accionan por ellos y en representación de sus hijos menores de edad, Amalia Trinidad Gongora Veliz, Maximiliano Andrés Gongora Veliz y Sebastián Vicente Gongora Veliz, interpuso demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra de Nelly Ximena Roxana Soto Espinoza S.A. (Colegio San Jorge), representado legalmente por doña Nelly María Soto Espinoza, solicitando al tribunal en definitiva, que ordene se indemnice por el valor total de los daños sufridos por sus representados, considerando el daño emergente, lucro cesante y el daño moral, por la suma total de \$206.000.000 o la suma que el tribunal determine en derecho, con costas.

indica el abogado que sus representados concurrieron el 19 de diciembre del 2016 al Colegio San Jorge para matricular a sus 3 hijos para el año 2017, indicándole el director que debía esperar hasta el 26 de diciembre del 2016 para recibir una respuesta, ya que el consejo estaba decidiendo si sería posible realizar la matrícula, agregando que el día 27 de diciembre, se les indicó que sus 3 hijos no tendrían matrícula para el año 2017 y que su matrícula terminaba el 31 de diciembre del 2016, precisando que el motivo de la medida, según el colegio. fue que “el colegio San Jorge no cumplía con sus expectativas como familia”.

Refiere que Sebastián Góngora Véliz (9 años) es alumno de 2do básico, con promedio 6,8, con buena evaluación personal y constantemente felicitado por profesora o inspectores. Por su parte Amalia Góngora Véliz (5 años), es alumna de medio menor (educación pre-escolar), con excelente comportamiento y ningún reclamo de parte de educadoras o apoderadas. Finalmente Maximiliano Góngora Véliz (7 años) es alumno de kínder y que ese año fue promovido a 1ero básico, alumno destacado entre todos sus compañeros en todas las áreas de su educación, por su personalidad y sobresaliente inteligencia.

Precisa el demandante que en el mes de octubre del año 2016, el colegio citó a sus representados para que firmaran una carta de compromiso por el comportamiento de su hijo Maximiliano, agregando que la referida citación coincidió de manera sospechosa, con una situación que habría ocurrido el día 18 de agosto del 2017, en donde la educadora de su hijo Maximiliano la Sra. Ángela Ramírez, en medio de la clase, les exhibió un video, que califica como muy fuerte para niños de 5 años, en donde en una familia de 4 integrantes mueren, video que no quiso ser visto por su hijo y que pese a sus quejas, fue obligado a verlo y a quedarse en la sala entre sollozos, mientras era exhibido por la educadora, situación que generó efectos psicologicos en el menor y fue causa de un reclamo formal que a la fecha no ha sido contestado.



Relata que se sintieron humillados y discriminados por la manera en que las cosas se dieron en la cancelación de la matrícula de sus 3 hijos, pues insiste en que no se cumplen las condiciones que indica el reglamento del colegio para tomar tan grave y decisión, añadiendo que sus representados recurrieron de la decisión del colegio mediante una solicitud de reconsideración, un reclamo a la superintendencia de educación y mediante la interposición de un recurso de protección con fecha 29 de diciembre de 2016, precisando que la solicitud de reconsideración nunca fue respondida, que la superintendencia habría aplicado una amonestación por escrito al establecimiento y que el recurso de protección fue acogido, ordenando la Corte al demandado que dejara sin efecto su decisión de poner término al contrato de prestación de servicios educacionales respecto de los hijos de los demandantes, quienes debían ser restituidos a clases con todos sus derechos y obligaciones para el año lectivo 2017, previo cumplimiento del proceso de matrícula.”

Continúa señalando que su hijo Maximiliano, en su nuevo colegio, ha dejado de manifiesto a través de su comportamiento, que todo lo mencionado en el colegio anterior, carece de veracidad y que el episodio del video lo mantuvo con crisis de pánico hasta aproximadamente octubre del año 2017 -incluso mientras estaba en su nuevo colegio-, debiendo ser llevado a una psicóloga infantil, quien luego de 5 sesiones de análisis entregó un informe confirmando que el video en cuestión, gatillo en él, un estado de pánico y psicosis que como niño no era capaz de sobrellevar por sí solo, siendo puesto en tratamiento para ayudarlo a superar sus crisis señalando además que la separación de sus compañeros le habría afectado su autoestima, al sentirse desechado de su grupo sin entender las razones reales del alejamiento repentino de su curso. A su vez, al hijo mayor de sus representados Sebastián, que en ese momento tenía 8 años, el cambio de colegio también lo habría afectado pues el llevaba 6 años en un ambiente escolar que para él ya era familiar y querido, por lo que no lograba entender lo ocurrido, del porqué no podía continuar en su colegio con sus compañeros y profesora, con la cual llevaba 2 años y era muy apegado a ella, agregando que la inserción en su nuevo colegio le costó mucho más que a sus hermanos, logrando integrarse y a formar nuevos vínculos, tanto con sus profesores, inspectores y nuevos compañeros, recién en octubre del año 2017, pues durante el primer semestre fue rechazado por ser nuevo, llegando a sufrir incluso bullying de parte de algunos compañeros del curso, lo que lo llevó a él en un par de ocasiones a reaccionar de manera ofuscada y brusca, por lo que el colegio, resolvió mantener su situación escolar en observación para el año 2018.



En el caso de Amalia, la menor de los 3 hermanos, indica que el periodo de adaptación duró todo el primer semestre del 2017, en donde todos los días lloraba por no querer estar en su nuevo colegio, y solo pedía volver a su anterior colegio con sus tías y compañeros, con los cuales había compartido 2 años.

En cuanto al derecho, indica que en el caso de marras existe una responsabilidad civil derivada de un contrato de servicios educacionales al que se puso término de forma unilateral por parte de la demandada, el cual afirma, al no ser renovado para el periodo 2017, se cometió un acto arbitrario que ha conculcado el derecho constitucional de igualdad ante la ley, vulnerando los derechos de sus representados y cita en relación a ello, lo dispuesto en los artículos 2.465 y 2.329 del Código Civil.

En relación al daño señala que doña Carla Veliz, ha realizado gastos por \$1.000.000 y no ha podido trabajar normalmente pues se dedicado a atender a sus hijos debido a las consecuencias psicológicas por el cambio de colegio, lo que avalúa en \$5.000.000 (cinco millones de pesos). Por ultimo en cuanto al daño moral, indica que doña Carla, se siente absolutamente vulnerada en su salud, pues los miembros de la familia, no duermen bien, pensando en la situación vivida, y la humillación que significa que los desarraiguen de su grupo humano de compañeros y amigos de infancia, junto con la visión crítica de los demás padres y apoderados, pues para la comunidad escolar, sus representados fueron expulsados, pasando a llevar sus derechos e incluso lo dictaminado por la Corte de Apelaciones, por todo lo cual, avalúa el daño moral de doña Carla en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos)

En relación a don Eduardo Cesar Gongora González, indica que el experimentó daño moral, por el sufrimiento y aflicción provocada por el actuar del Colegio, en contra de sus hijos, y por los problemas de salud que significó esta situación (presión nerviosa, insomnio, etc.), todo lo cual avalúa en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

Finalmente afirma que los menores Amalia Gongora Véliz, Maximiliano Gongora Véliz y Sebastián Gongora Véliz, experimentaron daño moral, por el actuar contrario a derecho de la demandada, el cual avalúa para cada uno, en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), es decir, un total de \$120.000.000 (Ciento veinte millones de pesos).

QUINTO: Que, la abogada Coralí Aravena León, en representación de la parte demandada contestó la demanda solicitando su rechazo con costas.

Reconoce que se celebró un contrato de prestación de servicios educacionales entre su representada y doña Carla Andrea Véliz Allende, para que



sus hijos pudieran recibir la educación en el establecimiento educacional Colegio San Jorge y que debido a reportes e informes educacionales del menor Maximiliano Góngora Véliz, alumno del Kinder “A”, el 12 de octubre de 2016, se solicitó por escrito a su apoderado titular, mantener el compromiso de corregir en el pupilo sus conductas disruptiva de clases, agresivas con sus compañeros y sus dificultades para reconocer normas y límites, agregando que el aludido documento, no fue firmado por el apoderado y consigna en su parte final que, “Si el alumno no cumple el compromiso incurriendo nuevamente en faltas, se evaluara su continuidad en el colegio para el año escolar 2017, reconociendo además que por problemas conductuales del menor, su constante y agresivo relacionamiento con sus pares y educandos, los reclamos de padres de compañeros de curso y la falta de involucramiento y disposición negativa de sus padres frente a las propuestas para superar los problemas conductuales de Maximiliano, es que el establecimiento educacional no renovó la matrícula del menor Maximiliano Góngora Véliz para el año lectivo 2017.

Luego reconoce la demandada la existencia del recurso de protección rol N°797-2016, y que dicha acción constitucional fue acogida por la Corte ordenando dejar sin efecto la decisión de poner término al contrato de prestación de servicios educacionales respecto de los hijos de la actora, y ser restituidos a clases con todos sus derechos y obligaciones para el año lectivo 2017, previo cumplimiento del proceso de matrícula, no obstante, precisa que el establecimiento, manifestó su completa disposición de reconsiderar la medida respecto del menor Maximiliano, previa aceptación formal y comprometida de las orientaciones y reglamentaciones del colegio, sin que el apoderado del menor referido cumpliera con el proceso de matrícula, tampoco con el compromiso de tomar las orientaciones y reglamentaciones del colegio, pues afirma que no matriculó para el año lectivo 2017, a ninguno de sus hijos como lo ordenó la I. Corte.

Además la demandada opuso la excepción de falta de personería del que comparece a nombre de los demandantes, indicando que el mandato judicial fue otorgado sólo por Eduardo César Góngora González y Carla Andrea Véliz Allende por sí, al letrado que dedujo la demanda, sin que éstos hubieren otorgado el referido mandato al mismo letrado por sus hijos menores de edad y para para actuar por ellos, por lo que estima que el letrado carece de personería para comparecer y deducir la demanda a nombre de los menores Amalia Trinidad, Maximiliano Andrés y Sebastián Vicente, todos Góngora Véliz.



Luego, opone la excepción de falta de representación legal del que comparece a nombre de los demandantes menores de edad, indicando que don Eduardo Góngora González y doña Carla Andrea Véliz Allende no han acreditado que efectivamente detentan la representación legal de sus hijos.

Además de las excepciones indicadas, alega la inadmisibilidad en la forma, en cuanto al régimen de responsabilidad por los cuales se demanda, indicando que es evidente que la demandante ha incurrido en graves errores al no precisar concretamente el ámbito de responsabilidad que le atañe a la demandada en el libelo pretensor, mezclando la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual.

En subsidio, alega el rechazo de la demanda por carecer de fundamentos en tanto no existiría la responsabilidad indemnizatoria por la cual se demanda al Colegio San Jorge S.A, por ausencia de los requisitos necesarios para establecerla, estimando que no es posible emitir juicio alguno de reproche respecto de su obrar y que hay ausencia de lesión o daño y de existir, no resultan atribuibles al actuar de su representada por cuanto los actores no cumplieron con el proceso de matrícula previo, lo que afirma, da cuenta de la pertinaz y resistente conducta de los actores padres del menor para involucrase en el proceso de mejorar la conducta de su hijo y que los actores concurrieron con su propia conducta a la producción del daños a sus hijos menores de edad, por lo que estima que cualquier perjuicio que pudiera alegarse, sólo proviene de la conducta de los padres del menor.

En cuanto a los daños cuya indemnización se reclama, reitera que respecto de su representada no procede la condena al pago de indemnización pecuniaria alguna, no obstante alega que además existe un exceso de avalúo de los daños demandados, los que afirma no se encuentran justificados y acreditados, y no se condicen con la relación de los hechos de la demanda, por cuanto estima que los padecimientos que se alegan son inexistentes o producto patologías propias previas, precisando que no obstante la alegación relativa a la incertidumbre del régimen de responsabilidad demandado, atendida la naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes –esto es, contractual-, el daño moral es improcedente.

SEXTO: Que, a fin de acreditar los supuestos de su acción, la parte demandante, rindió la siguiente prueba

I.- Documental:

En el folio 1



- Fallo de fecha 17 de enero de 2017, dictado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Arica, en causa ROL 797-2016 Protección.
- Certificado de nacimiento de Maximiliano Andrés Góngora Véliz.
- Certificado de nacimiento de Sebastián Vicente Góngora Véliz.
- Certificado de nacimiento de Amalia Trinidad Góngora Véliz.

En el folio 35

- Carta de fecha 28 de diciembre de 2016, emitida por doña Carla Veliz dirigida al director del Colegio San Jorge, don Omar Sagredo.
- Carta de fecha 06 de enero de 2017, emitida por don Omar Sagredo, como director del Colegio San Jorge, dirigida a doña Carla Veliz.

En el folio 38

- Fallo de fecha 16 de enero de 2017, dictado por la Ilma Corte de Apelaciones de Arica, en causa ROL 797-2016 Protección.
- Resolución exenta N°2017/PA/15/ 082 de fecha 10 de abril de 2017, emitida de la Superintendencia de Educación.

En el folio 45

- Certificado de nacimiento de Maximiliano Andrés Góngora Véliz.
- Certificado de nacimiento de Sebastián Vicente Góngora Véliz.
- Certificado de nacimiento de Amalia Trinidad Góngora Véliz.
- Mandato Judicial Amplio de fecha 20 de enero del año 2016, otorgado por doña Carla Andrea Veliz Allende y don Cesar Góngora González.

En el folio 46

- Informe psicológico emitido con fecha 20 de agosto de 2018, por doña Katherine Nova Leila, psicóloga, respecto de doña Carla Andrea Veliz Allende,
- Informe psicológico emitido con fecha 12 de octubre de 2018, por doña Katherine Nova Leila, psicóloga, respecto del menor Maximiliano Andrés Góngora Véliz.
- Certificado de atención psicológica, emitido con fecha 20 de agosto de 2018, por doña Katherine Nova Leila, psicóloga.

En el folio 47

- Informe de jefatura, emitido por el Colegio Junior College,

II.- Testimonial:

Rendida con fecha 27 de noviembre de 2019 en folio 56, consistente en los Atestados de doña Katherine Viviana Nova Leila y doña Giovanna Sofia Tarque Calle.



SÉPTIMO: Que, la parte demandada, rindió para acreditar sus pretensiones la siguiente prueba

I - Documental:

En el folio 44

Carta de fecha 06 de enero de 2017, emitida por don Omar Sagredo, como director del Colegio San Jorge, dirigida a doña Carla Veliz.

Comprobante de envío de carta a doña Carla Véliz Allende emitido por Chile Express de fecha 10 de enero de 2017.

Informe del Director del Colegio San Jorge Omar Sagredo Núñez de fecha 11 de enero de 2017.

II - Diligencias:

En el folio 54, se adjuntó Oficio de fecha 14 de noviembre de 2019, emitido por el director del Colegio Junior College, en que se informa que:

- La niña Amalia Trinidad Góngora Véliz, es alumna regular del colegio, que cursa el 1° Básico "B". y que su primera matricula es de fecha 22 de diciembre de 2017.
- Maximiliano Andrés Góngora Véliz. es alumno regular del colegio, que cursa el 3° Básico "D". y que su primera matricula es de fecha 22 de diciembre de 2017.
- Sebastián Vicente Góngora Véliz. es alumna regular del colegio, que cursa el 5° Básico "C". y que su primera matricula es de fecha 22 de diciembre de 2017.

III- EN CUANTO A LAS ALEGACIONES FORMALES DE LA DEMANDADA

OCTAVO: Que antes de discutir el fondo de la acción la parte demandada alegó al falta de personería del abogado y representación legal de los demandantes y, la falta de determinación del régimen de responsabilidad por el cual se demanda, alegaciones preliminares que dado su carácter procesal serán abordadas de manera previa.

NOVENO: Que las dos primeras alegaciones de la demandada serán rechazadas con el mérito de los certificados de nacimiento de los niños Amalia Gongora Véliz, Maximiliano Gongora Véliz y Sebastián Gongora Véliz, documentos que para estos efectos demuestran que los demandantes son sus padres y representantes legales y que, en el ejercicio de tal representación y de las facultades que y deberes se señalan en los artículos 224, 244 y 264 del Código



Civil, han comparecido por sí y en representación de sus hijos, dada la minoría de edad de estos últimos, representación legal que también ha servido para designar un abogado patrocinante para los represente y defienda en este juicio y en consecuencia, existiendo total regularidad en el mandato otorgado y utilizado por el abogado que representar a los demandantes en este juicio, estas excepciones serán desestimadas.

DÉCIMO: Que la parte demandada alegó además la inadmisibilidad en la forma de la demanda, indicando que el demandante erró al no precisar concretamente el ámbito de responsabilidad que le atañe a la demandada y mezcló la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual.

UNDECIMO: Considerando que la decisión judicial se construye sobre la base de hechos y que la determinación de la norma de derecho en los que ellos se subsumen, es una de las funciones que caracterizan la labor jurisdiccional, se estima atincente recordar lo que viene señalando la Excm. Corte Suprema desde el fallo Rol N° 3347-2009, de veinticuatro de marzo de dos mil once, en el sentido de que el derecho aplicable a un litigio es una deber y una obligación que vincula únicamente al juez, quien debe conocerlo, aplicarlo y conectarlo con las acciones, excepciones y alegaciones y defensas promovidas por las partes que sostienen el pleito.

DUODÉCIMO: Conforme a lo dicho, se estima que en este caso, pese a la generalidad de la demanda, la determinación del criterio de atribución de responsabilidad que corresponde a la demandada, puede y debe ser establecido por este juez en este fallo, teniendo presente para ello, que la demandante expuso que la responsabilidad civil de la demandada y su eventual obligación de indemnizar los perjuicios que se demandan, derivaban del contrato de prestación de servicios educacionales; que dicho contrato es reconocido por la demandada en todo momento y que la demandada no ha sufrido un perjuicio procesal o se ha visto privada de ejercer plenamente su derecho a defensa y ha usado todas la herramientas procesales para negar su responsabilidad y por tanto, siendo claro que la pretensión de los actores, su acción y los planteamientos inherentes a ellas, se encuentran desde el punto de vista formal, tanto en su cuerpo como en su petición, bajo el supuesto de un incumplimiento contractual y de la jurisprudencia mayoritaria de la Excm. Corte suprema (por ejemplo en las Sentencias de 26/08/19 y de 26/11/14 dictadas en las causas Rol N° 2.465-2018 y Rol N° 14.008-2013 que ha permitido el ejercicio autónomo de la acción indemnizatoria), esta alegación será igualmente desestimada.



IV- EN CUANTO A LA DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

DÉCIMO TERCERO: Que, de los escritos fundamentales, se advierte que no existe controversia en cuanto a la existencia de un contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre la demandada y la madre de los niños doña Carla Andrea Véliz Allende, tampoco se discute que los hijos de doña Carla Veliz, los demandantes, Amalia Gongora Véliz, Maximiliano Gongora Véliz y Sebastián Gongora Véliz, tuvieron durante el año 2016, la calidad de alumnos regulares del Colegio San Jorge de Arica y que en esa época cursaban el nivel medio mayor, kínder y segundo básico, respectivamente, lo anterior, como consecuencia.

Tampoco se controvierte por la demandada que, por supuestos problemas conductuales del niño Maximiliano Góngora Véliz y por la supuesta falta de involucramiento y disposición negativa de sus padres, el establecimiento educacional no renovó la matrícula de Maximiliano, ni la de sus dos hermanos para el año lectivo 2017.

DÉCIMO CUARTO: Además, del recurso de protección acompañado por ambos litigantes y de la Resolución exenta N°2017/PA/15/ 082, de fecha 10 de abril de 2017, emitida de la Superintendencia de Educación, se desprende como hecho, que la decisión de no renovar la matrícula de los tres hijos de los demandantes, fue un acto arbitrario e ilegal que los dejó sin la posibilidad de continuar con sus estudios durante el año 2017, en el Colegio demandado y que dicho acto, constituyó respecto de los tres menores y de su apoderado, una discriminación ilegal que vulneró, a lo menos, la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

DÉCIMO QUINTO: Que, establecidos los hechos fundamentales, es necesario dilucidar ahora, si la cancelación de la matrícula de los hijos de los demandantes, constituye a su vez, un incumplimiento contractual generador de responsabilidad civil del demandado, objetivo que requiere de manera previa, establecer el contenido del contrato de prestación de servicios educacionales que existió entre las partes.

DÉCIMO SEXTO: Que, tal como se dijo, las partes no discuten la existencia del contrato, sin embargo, ninguna de ella acompaña algún documento que lo detalle. En este contexto y conforme a su objeto y fin, el contrato de prestación de servicios educacionales contiene desde luego para el colegio, la obligación prestar servicios educacionales al alumno y para el alumno o su apoderado, la obligación de remunerar tales servicios. A su vez, en este contrato el alumno puede ser parte o



beneficiario y la prestación del establecimiento educacional, consiste en la aplicación de un programa progresivo de enseñanza acorde con los planes y programas de estudios oficiales o propios de cada establecimiento y su proyecto educativo, en condiciones de seguridad y bienestar para los alumnos.

Ahora bien, la noción anterior refleja el contenido básico del contrato en estudio, sustrato que a juicio de este sentenciador, debe ser complementado o integrado siempre, y aun contra la voluntad de las partes, con los derechos de apoderados y especialmente, con los derechos de los alumnos que contempla el artículo 10 de la Ley General de Educación, a saber, el derecho a recibir una educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; el derecho a una atención adecuada y oportuna en caso de tener necesidades educativas especiales; el derecho a no ser discriminado arbitrariamente y a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y, el derecho a que sea respetada su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.

Estos derechos (derivaciones de los derechos fundamentales a la integridad física y psíquica (art. 19 n.º 1 de la CPR), a la igualdad ante la ley (art. 19 n.º 2 de la CPR)12 y a la educación (art. 19 n.º 10 de la CPR), deben entenderse incorporados al contrato de que se trata conforme al artículo 1546 y refrendan la especial función protectora de los alumnos que asumen los prestadores de servicio educacionales, y por ello, estas obligaciones y por proteger en definitiva, dedechos fundamentales de los alumnos y apoderados, tienen sin lugar a dudas, el carácter de obligaciones esenciales para el prestador de servicios educacionales, de modo que su inobservancia, constituye una infracción que puede ser reclamada por el acreedor como un incumplimiento de las obligaciones del deudor.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, estimando que el contrato en estudio, es un acto jurídico complejo en el que se comprenden y protegen intereses patrimoniales y extrapatrimoniales, que se integra por su contenido elemental, por lo pactado por las partes y también, por los derechos de los alumnos y de los apoderados y la buena fe, es posible concluir que en este caso, al haberse calificado jurídicamente la cancelación de la matrícula de los hijos de los demandados, como un acto arbitrario y discriminatorio que vulneró a lo menos, el derecho de igualdad ante la ley, dicha decisión unilateral fue sin duda, una flagrante inobservancia al derecho de los niños, alumnos del colegio demandado, a no ser discriminadas arbitrariamente y por tanto, un incumplimiento de una obligaciones esencial del contrato de prestación de servicios educacionales, por parte de la demandada, incumplimiento que conforme a los antecedentes del proceso, especialmente el recurso de protección referido y a



falta de prueba en contrario, se presume culpable y que tratándose además, del incumplimiento de una obligación de no hacer y que lo hecho por el contratante incumplidor, en cuanto acto de discriminación, no puede deshacerse conforme al artículo 1.555 y por tanto se encuentra en mora según el artículo 1.557, ambos del Código civil, se estima procedente la indemnización demandada, sin que obste para ello, la alegación del demandado en torno a que en su momento manifestó su disposición de reconsiderar la medida y, en cuanto a que los apoderados de los menores, no cumplieron con el proceso de matrícula como lo ordenó la I. Corte (decisión razonable en el contexto de discriminación ocurrido), por cuanto ambas alegaciones, se refieren situaciones posteriores al incumplimiento (o al acto de discriminación) y ciertamente no lo revierten ni borran sus efectos, tal como lo proviene el inciso primero de la primera norma citada.

DÉCIMO OCTAVO: Que establecida la existencia de un incumplimiento contractual relevante y culpable del demandado, de una obligación de no hacer (como es aquella que le impedía discriminar a los niños de autos) contraída en el contexto de un contrato de servicios educacionales que indudablemente protege también intereses extrapatrimoniales, es necesario determinar si este incumplimiento, produjo los efectos perjudiciales que afirman haber sufrido los demandantes.

DÉCIMO NOVENO: Que, en primer término, el daño demandado por don Eduardo Cesar Gongora González, será íntegramente rechazado, ya que se estima por este Juez que dicho demandante, no es parte del contrato de prestación de servicios educacionales, ni beneficiario del mismo y por ello, los efectos dañinos que reclama no tienen el carácter de daño contractual, por lo que habiéndose centrado la controversia en este ámbito de la responsabilidad civil, su demanda no puede prosperar y será íntegramente descartada.

A su vez, el daño material reclamado por la doña Carla Andrea Veliz Allende será igualmente rechazado, en el caso de los gastos, por no existir detalle de ellos en la demanda, ni prueba pertinente en cuanto a su existencia y en el caso de la imposibilidad de trabajar, por no haberse acreditado tal circunstancia, ni la existencia de un trabajo previo abandonado por esta demandante.

VIGÉSIMO: Que dilucidado lo anterior, resta pronunciarse sobre el daño moral demandado por la madre (apoderada) y por los niños, considerando al efecto que este tipo de daño, ha sido definido últimamente por la Excma. Corte Suprema como el sufrimiento, trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por



parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en un daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que frente a lo anotado en el motivo anterior, resulta palmario que la determinación de la demandada de ponerle término al contrato sin que existiera una causal que lo justificara, le ocasionó a éstos demandantes aflicción, amargura, ansia y preocupación, primero por la injusticia y sin razón de la decisión y luego, por la tristeza que supone para los niños y para la madre que los cuida, la separación arbitraria de su entorno educacional y en fin, por la incertidumbre que seguramente produjo la necesidad de conseguir un nuevo colegio y la angustia de los niños ante la eventualidad de ser rechazados y no encajar en un nuevo ambiente educacional, efectos que además de ser una consecuencia normal en la psiquis de una persona sometida a un acto de discriminación como el sufrido por los demandantes, han sido ratificados por los Informes psicológicos emitidos por doña Katherine Nova Leila y por su declaración en calidad de testigo de la parte demandante y por el testimonio de la testigo Giovanna Sofia Tarque Calle y por tales circunstancias, se estima que en la especie los demandantes efectivamente han sufrido daño moral como consecuencia del incumplimiento culpable del demandado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, habiéndose establecido la procedencia de la indemnización y la existencia de daño moral en los demandantes referidos en el motivo precedente, corresponde determinar la cuantía de la indemnización.

En este estadio y considerando que los efectos dañinos sufridos por los niños y por la madre demandante ya han sido, en alguna medida atenuados por la acción de la justicia en el recurso de protección deducido y por lo resuelto por la Superintendencia de Educación y que, la edad de los menores, seguramente les permitirá olvidar y superar el sufrimiento vivido y dar un sentido a la experiencia sufrida y, teniendo presente en fin, que el dinero que se paga como indemnización simplemente quiere compensar, dando a la víctima una posible satisfacción que ponga a su alcance otros medios, otras satisfacciones que atenúen la pérdida sentida y que la reparación en dinero únicamente cumple un rol como medida común de los bienes y no reemplaza la aflicción, se estima prudente establecer como monto de la indemnización, la cantidad de \$2.000.000, para la demandante Carla Andrea Veliz Allende y de \$3.000.000, para cada niño, rebajando los montos demandados a estas cantidades.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254, 341, 342, y 768 N°4, del Código de



Procedimiento Civil, artículos 1.437, 1.444, 1.445, 1.448, 1.489, 1545, 1,546, 1.555, 1.557 y 1.698 y siguientes del Código Civil, se declara:

I.- Que, se rechazan las objeciones de documentos deducidas en el folio 57 por la parte demandante y folio 62 por la parte demandada.

II.- Que, se rechazan las alegaciones de falta de personería del abogado, falta de representación legal de los demandantes y de inadmisibilidad en la forma, en cuanto al régimen de responsabilidad por los cuales se demanda, deducidas en la contestación de la demanda de fecha 05 de noviembre de 2018, en el folio 11.

III.- Que, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida, sólo en cuanto se condena a la Nelly Ximena Roxana Soto Espinoza S.A. (Colegio San Jorge), al pago de las siguientes sumas:

- a) \$3.000.000 (tres millones de pesos) para Amalia Gongora Véliz,
- b) \$3.000.000 (tres millones de pesos) para Maximiliano Gongora Véliz
- c) \$3.000.000 (tres millones de pesos) para Sebastián Gongora Véliz y
- d) \$2.000.000 (dos millones de pesos) para doña Carla Andrea Veliz Allende.

IV.- Que se rechaza en lo demás la aludida demanda.

V.- Que la indemnización fijada deberá ser pagada con reajustes e intereses máximos convencionales que se generen entre la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada y su pago efectivo.

VI.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida en el pleito.

Anótese, regístrese, notifíquese por cédula y archívese si no se apelare

Rol N° C-695-2018

Dictada por don Gonzalo Roberto Quiroz Espinoza, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica. Autoriza doña María Georgina Aguirre Godoy, Secretaria Subrogante.

CERTIFICO: Que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. - Arica, doce de mayo de dos mil veinte

